

Seguir con vida, mantenernos vivo como planeta, frente al virus, pero también frente a lo que pueda suceder, significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria. Como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar. [PAUL B. PRECIADO, «APRENDIENDO DEL VIRUS»]

sostener

#63

PLATAFORMA DE INICIATIVAS
CIUDADANAS FRENTE AL COVID19

*De las plataformas virtuales a los
ecosistemas situados*

Adriana Goñi, Daniel Bergara
(responsables); Patricia Larrosa,
Margarita Baptista, Camilo Zino,
Lucía Segalerba, Cecilia Giovanoni.
lab.urbanismocolaborativo@
gmail.com

#64

RED TEXTIL

Defensa de la alegría

EFI Diseño y ESS: Daniel Bergara,
Margarita Baptista, Patricia
Larrosa.

EUCD: Carolina Poradosú, Rosita
De Lisi, Federico Viera, Lucrecia de
León, Daniela Dodera; bachilleres
Cecilia Aguerre,
Hernán Montemuño.
CSEAM: Carla Assandri.
danielbergara@gmail.com

#68

COVID EN CENTROS DE LARGA
ESTADÍA

Viejos invisibles

Lucía Bogliaccini, Nicolás
Inzaurrealde, Cynthia Olguín.
largaestadia@fadu.edu.uy

#70

EMPRENDIMIENTOS
AUTOGESTIONADOS EN CASAVALLE

Si es posible ¡que sea!

Equipo FADU en Casavalle:
José de los Santos, Lucas Butler,
Eloisa Ibarzabal, Jessica Mesones,
Luca Praderio, Claudia Varín.
faduencasavalle@gmail.com

*

*Prestar apoyo, dar
aliento o auxilio.*

[RAE]

■ JUAN FERRER (Salto, 1974).

Arquitecto (Udelar). Candidato a magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Córdoba). Director ejecutivo del Departamento Regional Norte de Arquitectura, profesor adjunto del Área de Estudios Territoriales y del Área Diseño (Licenciatura en Diseño Integrado, FADU-Udelar).

DEL VERBO SOSTENER

Desde el inicio de la pandemia asistimos a un notorio fracaso del sistema civilizatorio dominante para transitar la crisis, fundamentalmente en los países pobres o con evidentes restricciones en el ejercicio de derechos, a juzgar por las penosas consecuencias sociales visibles a escala planetaria. Sin embargo, en este contexto adverso la pandemia nos ha dejado algunas lecciones. La situación de excepcionalidad nos ha mostrado algu-

nos sugerentes caminos alternativos al modelo actual. Las acciones promovidas desde la sociedad civil, entre las que se destacan las desarrolladas por la Udelar, dan cuenta de la validez para iniciar caminos de transición hacia formas de organización socioecológicas más justas e inclusivas, que nos permitan mirar el futuro con mayor optimismo.

¿QUIÉN ASEGURA EL ACCESO AL BIENESTAR?

Frente a la indiferencia y falta de empatía predominantes del sistema económico ante la emergencia sociosanitaria, cuya posición estuvo pautada por acciones más vinculadas a la caridad y el asistencialismo de corto plazo, la respuesta del Estado es esencial para garantizar las prestaciones de bienestar a la población más pobre, que en nuestro país alcanza incluso a poner en riesgo su seguridad alimentaria.

Las prioridades que cada Estado asigna a la gestión de sus políticas se hacen explícitas ineludiblemente por medio de la inversión que se destina a concretar los fines previstos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta el gasto fiscal que 16 países de América Latina y el Caribe destinaron para mitigar las consecuencias de la crisis provocada por la covid-19. En ese contexto, Uruguay exhibe un magro 0,7% de su producto interno bruto (PIB), solamente con Haití por debajo de ese valor.¹

De ninguna manera se trata de demostrar la ineficiencia del Estado para el manejo de las crisis; por el contrario, se apunta a señalar el vacío que se produce cuando su acción es menos proactiva de lo necesario.

LA DEFENSA DE LA SOLIDARIDAD

Cuando el Estado no logra —por las razones que sea— atender de manera efectiva las necesidades de bienestar de los ciudadanos, habitualmente emergen las acciones solidarias de la sociedad civil, que de manera más o menos organizada intenta cubrir las

demandas que quedan desatendidas. Sostener las necesidades de los sectores de la sociedad que han sido más golpeados por la crisis a partir de nuevas formas de organización mediante redes previamente tendidas en el territorio, o por iniciativas espontáneas, ha sido una tarea constante del colectivo social. Desde las ollas populares, quizá la manifestación más evidente y generalizada de la crisis social, hasta otras con menor visibilidad como la cooperación cotidiana intravecinal dan cuenta de las respuestas solidarias de la sociedad, sensibilizada por la situación.

Sin embargo, las acciones provenientes de la base social deben entenderse, tal como apunta Manuel Castells,² en articulación con el Estado, como forma de conseguir una transformación política profunda.

En este contexto, la participación de los actores académicos, como integrantes de la sociedad y como representantes de saberes expertos, también adquiere relevancia en momentos en que el conocimiento puesto a disposición de los sectores más vulnerables, así como del Estado, puede contribuir a gestionar las crisis de mejor manera. Tal como expresa Boaventura de Sousa Santos, «Los intelectuales deben aceptarse como intelectuales de retaguardia, deben estar atentos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellas».³ Las iniciativas llevadas adelante por la Universidad de la República en su conjunto y particularmente por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en este tiempo de emergencia, reflejan la adhesión a este llamado a ocuparse de los problemas más sentidos por las poblaciones. Promovidas desde el ámbito universitario, estas experiencias desbordan la esfera académica para aproximarse a las demandas y preocupaciones de sectores desfavorecidos. En ellas se

¹ CEPAL. Panorama fiscal de América Latina y el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/6-P), Santiago, 2020.

² Castells, Manuel. Globalización, Estado y sociedad civil: El nuevo contexto histórico de los derechos humanos. *Isegoría*, 22, 5-17, 2000. <https://doi.org/10.3989/isegoria.2000.i22.518>

³ De Sousa Santos, Boaventura (2020). *La cruel pedagogía del virus*. Buenos Aires: CLACSO, 2020, p. 41.

muestran diversas estrategias de cercanía a la base social para sortear el distanciamiento imperante, sea mediante el contacto directo en algunos casos o apelando a los vínculos virtuales en otros.

LAS PERSONAS POR ENCIMA DEL MERCADO

Frecuentemente las crisis se presentan como ventanas de oportunidad para generar transformaciones y reordenamientos que mejoren el curso de las sociedades mediante el cuestionamiento de las bases cristalizadas y aparentemente inamovibles de la reproducción social. Sin embargo, para los sectores de la sociedad inmersos en históricas desigualdades estructurales, con limitaciones en el acceso a bienes y servicios, con brechas importantes en los niveles de ingresos o que quedan por fuera de los objetivos de la política, es difícil imaginar que una crisis pueda generar expectativas favorables.

No obstante, la situación de emergencia abrió posibilidades ciertas para repensar los modelos de organización productiva y de generación de empleo. La iniciativa llevada adelante en el marco de la Red Textil, un ámbito de producción asociativo con base en organizaciones sociales que la pandemia encontró en su etapa de inicio, se presenta como un mecanismo alternativo a la lógica del mercado. Alineada con los principios de la economía social y solidaria, la acción desarrollada por la Red Textil apunta a fortalecer las cadenas de valor en un modelo de autogestión y propone la solidaridad sobre la competencia y la organización colectiva en lugar de los emprendimientos individuales.

Tras la declaración de emergencia sanitaria y la exhortación a respetar el aislamiento, la red se puso en funcionamiento movida por la necesidad de mantener las fuentes de sustento económico, fuertemente disminuido por la nueva situación. Con el impulso inicial de diversos actores de la sociedad, entre los cuales se destaca el rol desempeñado por el equipo de la FADU, los emprendedores tuvieron la oportunidad, de vincular su capacidad de trabajo con la situación de la salud para encontrar vías alternativas de ingresos.

En esta ecuación, la Udelar, por intermedio del Hospital de Clínicas, ahora en el rol de contratante, jugó un papel fundamental para impulsar la iniciativa, lo que pone en evidencia el valor de la articulación entre los diferentes sectores de la sociedad movidos por sensibilidades e intereses compartidos.

EL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA

Esta crisis dejó en evidencia, una vez más, la incapacidad o el desinterés del sistema capitalista globalmente instituido para resolver los problemas particulares de los territorios y del ciudadano común. Bajo este modelo, podemos incluir al mercado, que pauta las

lógicas de producción, distribución y consumo, que incluye a los grupos de presión que lo dirigen, así como a los gobiernos alineados con la idea neoliberal de la salvación individual en función de los méritos que cada uno esté dispuesto a hacer para alcanzarla. En esta especie de carrera —con trampas— hacia el éxito, en la que las desigualdades e injusticias históricas no forman parte de la ecuación, se propone la transferencia hacia el individuo de las cargas y obligaciones que incumben a toda la sociedad. Ante este escenario de individualismo creciente, generador de mayores desigualdades, surgen movimientos que procuran recuperar y promover las acciones desde la sociedad civil para impulsar procesos de construcción colectiva.

La experiencia promovida por docentes de la FADU en articulación con otros actores, a partir de la creación de una plataforma de iniciativas ciudadanas, contribuye a poner en un plano visible las manifestaciones basadas en relaciones de solidaridad en sus diversas expresiones. Con el objetivo puesto en el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades instaladas en los territorios locales, el mapeo de las diferentes iniciativas permite crear redes de cooperación y construir una cultura alternativa.

Con la implementación de la plataforma Acá Estamos Uy, la cultura de la información y de las transacciones virtuales, que fueron factores clave para la consolidación de las redes globales, cobra sentido ahora como un medio de insurrección comunitaria con base territorial. Nos muestra además que las redes tendidas en articulación con los intereses de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado, en este caso el local, se puede avanzar un paso más y pensar en prácticas innovadoras de gestión territorial. Esta primera etapa dio paso a otra que permitió desarrollar prácticas de cogestión desde el territorio, con la participación de los actores locales.

Así planteado, la puesta en funcionamiento del proyecto Reactor remite a la noción del derecho a la ciudad,⁴ en tanto la comunidad como sujeto colectivo y de acuerdo con sus sensibilidades y expectativas ejerce el derecho a decidir sobre el proceso de innovación urbana, guiada por criterios de economías transformadoras.

Se produce, en este caso, la transferencia desde una propuesta de organización comunitaria surgida como respuesta a la emergencia hacia un proyecto de cogestión para la transformación del hábitat con posibilidades de establecerse como un modelo alternativo. Como lo plantea Paul B. Preciado, la concatenación de estas experiencias podría entenderse como el pasaje de «una mutación forzada a una mutación deliberada».⁵

SOSTENER LOS ENCIERROS

La pandemia también nos recordó que las crisis no afectan a todas las personas, grupos sociales o territorios de igual manera. Como ocurre con todo

4 Lefebvre, Henry. *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Ediciones Península, 1978; Harvey, David. *Mundos urbanos posibles*. En Ramos, Ángel Martín (ed.), *Lo urbano en 20 autores contemporáneos (177-198)*. Barcelona: Ediciones Universitat Politècnica de Catalunya, 2000.

5 Preciado, Paul B. *Aprendiendo del virus*. *El País* de Madrid [diario digital], 28 de marzo de 2020, p. 185. Recuperado de https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585316952_026489.html

6 De Sousa Santos, Boaventura, *op. cit.*, p. 45.

7 Preciado, Paul B, *op. cit.* p. 185.

fenómeno que se inscribe dentro de esa idea confusa y cínica de la globalización, la irrupción del virus diferenció claramente los sectores privilegiados de los desfavorecidos. Aquellos grupos que se encontraban en peores condiciones para enfrentar la crisis —mujeres, trabajadores precarizados, inmigrantes indocumentados, poblaciones sin acceso a los servicios básicos, minorías, entre otros— inevitablemente sufrieron las consecuencias con mayor severidad. Entre estos grupos sociales «que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella»,⁶ se incluye a los adultos mayores, a quienes la pandemia colocó en un lugar de alto riesgo.

Estas condiciones previas de vulnerabilidad son aún más preocupantes cuando se trata de habitantes de centros de larga estadía (mal llamados «residenciales», «geriátricos», «hogares de ancianos» o «casas de salud»). Si bien el confinamiento y el aislamiento ya pautaban el desarrollo de la vida cotidiana en el momento previo a la pandemia, la circulación generalizada del virus convirtió a estos centros en zonas especialmente inseguras, lo que aumentó significativamente el riesgo de contagio en una población vulnerable a sus efectos y profundizó la desvinculación con el resto de la sociedad.

En este sentido, la experiencia desarrollada desde la FADU que concluyó con la elaboración del manual *Covid en centros de larga estadía* procuró, ante una respuesta institucional deficiente, poner a disposición de los establecimientos, de las instituciones y del público en general una guía práctica para la organización de los espacios físicos con el objetivo de evitar el ingreso de la enfermedad, así como para convivir con el virus y evitar su propagación. Esta herramienta procura recuperar el enfoque disciplinar para el diseño del entorno físico del adulto mayor, así como la validez de la mirada médica en la organización del espacio y plantea respuestas concretas para la gestión operativa de los establecimientos. Esta valiosa experiencia se percibe como una pequeña parte de una reflexión crítica más profunda sobre las características arquitectónicas de estos centros, que supera la respuesta a una situación de emergencia actual y apunta a mejorar integralmente las condiciones de sus habitantes para desarrollar una vida plena.

INCLUSIÓN EN CLAVE COMUNITARIA

La organización vecinal con sentido comunitario ha conformado en este tiempo un capital valioso para sostener las diferentes carencias y restricciones a las que se enfrentan las poblaciones más vulnerables. En muchos casos, estas iniciativas están motorizadas con el objetivo de mantener el sustento económico o por la necesidad de acompañamiento y contención emocional mediante la pertenencia a una comunidad. La experiencia que viene desarrollando la FADU

en Casavalle, que se intensificó durante la pandemia, en buena medida recoge y promueve estas prácticas.

Sin una intención expresa de consolidar un grupo en torno a objetivos e intereses necesariamente alineados, el colectivo Mujeres de Casavalle, creado en emergencia, sirvió para generar un nuevo ámbito de participación amplia y diversa. Esto propició el acercamiento entre vecinas que, a pesar de vivir a pocas cuadras de distancia, no se conocían. Inicialmente destinado a reflexionar sobre los procesos de la mujer como excusa para lograr el involucramiento de las mujeres y adolescentes del barrio, en una etapa posterior se desarrollaron exploraciones para elaborar productos que contribuyeran a generar ingresos económicos y finalmente a fomentar el empoderamiento de las vecinas.

Con la transferencia recíproca de conocimiento como consigna, la situación de emergencia abrió la posibilidad de contribuir a la formación técnica de las vecinas, a la vez que estas aportaron sus propios saberes y percepciones para ayudar a comprender los problemas de la realidad, para superar y enriquecer el conocimiento académico. Este espacio ofició como una plataforma para construir el sentido de ciudadanía y finalmente promover la expansión de las capacidades de las mujeres para enfrentar una realidad adversa.

¿Y DESPUÉS QUÉ?

Son contundentes los ejemplos que demuestran la validez de las alternativas de desarrollo de la sociedad que no se rigen por las reglas preestablecidas, tanto las que se proponen desde el mercado como desde la esfera institucional. Con la evidencia de las experiencias presentadas, se refuerza la idea de que como sociedad es posible caminar hacia una transición socioecológica, sustentada en la democracia participativa y en el impulso de iniciativas provenientes de las comunidades, que promuevan la agencia de las personas y permitan abrir espacios para la consolidación de las redes de solidaridad, orientadas a la reproducción de la vida por sobre el modelo de acumulación.

Como apunta Paul B. Preciado, dependerá de nosotros generar las transformaciones necesarias para hacerlas realidad.

Seguir con vida, mantenernos vivos como planeta, frente al virus pero también frente a lo que pueda suceder, significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria. Como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar.⁷

En este contexto, los actores universitarios estamos llamados a comprometernos, mediante la generación y gestión de conocimiento coconstruido, apropiado y apropiable por la sociedad, a impulsar esa transición. ■